

Voces: DELITOS TRIBUTARIOS - EVASIÓN FISCAL - EVASIÓN FISCAL AGRAVADA - REPARACIÓN DE PERJUICIOS

Partes: O. D. H. | evasión agravada tributaria

Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba

Sala/Juzgado: I


Fecha: 19-may-2025


Cita: MJ-JU-M-155849-AR | MJJ155849

Producto: MJ



El instituto de la reparación integral del daño resulta aplicable a causas relativas a delitos tributarios.

Sumario:

1.-Toda vez que el imputado propuso la reparación integral del perjuicio por el hecho que se le atribuye, al abonar la totalidad del monto reclamado por el ARCA que incluye deuda de capital e intereses y El Ministerio Público Fiscal ha prestado conformidad, por estimar viable e integral la proposición, y el representante legal de ARCA se opuso, por entender que el régimen penal tributario impide aplicar el instituto del art. 59, inciso 6, del Código Penal, debe darse prevalencia a la anuencia brindada por la auxiliar fiscal, que ha propiciado la aplicación del instituto en pos de resolver en forma alternativa el conflicto penal, en consonancia con el art. 22  del Código Procesal Penal Federal, que impone tanto a jueces como a representantes del Ministerio Público procurar resolver los conflictos surgidos a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

2.-Hay razones valederas para sostener que el instituto de la reparación integral del daño resulta aplicable a causas relativas a delitos tributarios pues, en efecto, el art. 16 del art. 29  del régimen penal tributario establecido por Ley 24.769 establece que, en supuestos como los de este caso, la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula.

3.-La reparación integral del perjuicio opera en el marco del Código Procesal Federal como causal extintiva de la acción sin ningún tipo de condicionamiento; en efecto, si bien la norma sustantiva estipula que dicho efecto debe darse de conformidad con lo previsto en las leyes procesales, lo cierto es que el Código Federal de procedimientos no fija exigencias determinadas para su acaecimiento, mientras que la conciliación se halla sujeta a la aplicación de un procedimiento particular, lo cual hace evidente que los institutos mencionados son diversos y no pueden ser considerados de manera indiferenciada.

4.-Cuando el art. 4  del Código Penal alude a que sus disposiciones se aplicarán a los delitos de las leyes especiales en cuanto éstas no dispongan lo contrario, se está refiriendo expresamente a normas que se opongan a su régimen general, lo que no ocurre en el caso de los delitos tributarios que prevén expresamente la posibilidad de que se extinga la acción en determinados supuestos. 5. No es posible considerar que el régimen de extinción de la acción establecido por el art. 59 inciso 6°  del Código Penal resulte contrario a lo establecido en la ley penal tributaria, sino que en todo caso la complementa.

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA I

Córdoba, 19 de mayo de 2025.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados "O. D. H. S/evasión agravada tributaria" (Expte. N° FCB 8880/2021/TO1), llegados a despacho para resolver; Y CONSIDERANDO:

I.- Que con fecha veintisiete de marzo de 2025 el Dr. José Esteban Lunad Rocha, en representación técnica de Domingo Horacio Oliva, presentó un escrito ofreciendo en concepto de reparación integral del perjuicio en los términos del art. 59, inciso 6, del Código Penal y del art. 22 del Código Procesal Penal Federal, la suma de catorce millones, seiscientos cincuenta y siete mil pesos, a pagarse

en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

II.- Con fecha 19 de octubre del corriente año, se celebró la audiencia solicitada, en presencia de la defensa técnica del imputado -Dr. José Esteban Lunad Rocha-, la Fiscal Auxiliar -Dra. Lorena Martelli-, el apoderado de ARCA -Dr. Roberto Bustos Marum-, y el imputado - Domingo Horacio Oliva- junto a su esposa quien sería la que abonaría el total de la deuda que Oliva contrajo con ARCA.

En dicha audiencia, el Dr. Lunad Rocha manifestó que el acuerdo de reparación integral del perjuicio (art. 59, inc. 6, CP) al que arribaron con el Ministerio Público Fiscal consistía en pagar el total de la deuda por la que se encuentra imputado Oliva, más intereses hasta la fecha, lo que arrojaría un total de catorce millones seiscientos cincuenta y seis mil pesos (\$14.656.000), abonándolo en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

III.- En el marco de la audiencia, el Dr. Roberto Bustos Marum, en representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, expuso que el instituto de la reparación integral del perjuicio no es aplicable a los delitos tributarios. Afirmó que la posibilidad de extinción de la acción penal por pago para los delitos tributarios está expresamente regulada en la propia ley penal tributaria.

Sostuvo dicha posición alegando que en nuestro ordenamiento jurídico se cuenta con un régimen general establecido por el Código Penal y un régimen especial sancionado en el art. 16 del Régimen Penal Tributario.

Que esta aparente colisión de normas se soluciona con la regla prevista en el art. 4 del Código Penal, que establece que las disposiciones generales del código se aplican a las leyes especiales, salvo cuando hubiese previsión en contrario. Así, aunque se concretaría el requisito de "integralidad" que requiere el art. 59 del Código Penal, el propio apego a las normas impone que no se deba conceder la reparación integral en este caso concreto.

Con cita de antecedentes de la Cámara Federal de Casación Penal, solicitó el rechazo de la petición de la defensa.

Asimismo, advirtió que la suma pecuniaria ofrecida por la defensa se corresponde a un monto dinerario que oportunamente informó A.R.C.A. en respuesta a un oficio de solicitud del Ministerio Público Fiscal, el trece de marzo pasado, pero calculando los intereses al día de la fecha la suma se elevaría a catorce millones setecientos cincuenta y seis mil pesos con sesenta y siete centavos (\$14.756.885,67). Por otro lado, en atención al proceso de quiebra al que se encuentra sometido Oliva, solicitó que se acredite el origen lícito de los fondos ofrecidos.

También consideró la conducta del encartado con posterioridad al hecho, informando que el nombrado cuenta con una causa abierta en instrucción caratulada "O. D. H.s/ infracción Ley 27.430" FCB 16376/2024, que se encuentra en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, que se origina en una denuncia presentada por el ARCA en noviembre de 2024 por la posible comisión de seis hechos de delitos tributarios, entre los cuales uno sería por evasión agravada por el uso de facturas apócrifas en relación al IVA 2018, por la suma de 2.555.459,76 que tiene algunos puntos de contacto con los hechos que se ventilan en la presente causa.

Finalmente, hizo reserva de casación.

IV.- A su turno, la Fiscal Auxiliar Dra. Lorena Martelli sostuvo que, más allá de que el instituto de reparación integral del perjuicio no se encuentra previsto como una causa de disponibilidad de la acción penal en el art. 30 del CPPF, lo cierto es que el art. 22 de ese cuerpo legal obliga a

los jueces y a los representantes del Ministerio Público Fiscal a solucionar el conflicto que surge a raíz de un hecho punible de modo tal que entre sus protagonistas reine la armonía y la paz social (cfr. Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N°27.148, art. 9 inc. e).

Respecto a la propuesta pecuniaria concreta formulada por el imputado en concepto de reparación integral, comprensiva del capital e intereses, catorce millones setecientos cincuenta y seis mil pesos con sesenta y siete centavos (\$14.756.885,67), entendió que es integral y razonable. Así, concluyó que debe hacerse lugar al instituto incoado por el nombrado con la representación de su abogado defensor y, una vez cumplimentado el pago del monto dinerario referido a la ARCA, dictarse su sobreseimiento por extinción de la acción penal (art. 59 inc. 6 del CP, art.

336 inc. 1 del CPPN y art. 22 del CPPF).

Sugirió al Tribunal se le de un plazo al ARCA para que aporte un número de cuenta a los fines del depósito de la transferencia del monto dinerario en caso de que se acepte el acuerdo de reparación integral. Y, para la hipotética situación de la negativa por parte del ARCA a recibir el dinero, sugiere que se lo destine a una institución de bien público que el Tribunal estime conveniente.

Por último, coincidió con la representante de la ARCA en que el procesado debe acreditar el origen de los fondos con los que hará frente a la propuesta de reparación integral del perjuicio.

V.- Finalmente, el Dr. Lunad Rocha expresó la conformidad de la defensa con lo planteado por la representante del fisco nacional en el sentido de actualización al día de la fecha del monto pecuniario ofrecido, por un lado y por el otro, respecto de la presentación por parte de su asistido respecto del origen lícito de los fondos con los que se haría frente a la propuesta económica.

En cuanto a lo señalado por el Dr. Bustos Marum sobre la conducta de su defendido, alegó que el mismo siempre estuvo a

disposición del Tribunal, con defensas no dilatorias, que asistieron a todas la audiencias y citaciones fijadas en la presente causa, solicitando autorización para poder retirarse del domicilio a la hora de realizar viajes y aportando información de

todos los movimientos financieros al ARCA. En segundo lugar, con respecto a la causa tramitada en el Juzgado Federal N°1, sostiene que no tiene ningún punto de contacto con los presentes autos, sino se trataría de una situación de litis pendencia y que las mismas se encuentran en etapa de indagatoria, por lo que entendió que, las oposiciones formuladas por el Dr.

Bustos Marum, no deben prosperar.

Finalmente dio el consentimiento de que el destino del dinero, en caso de prosperar el pedido de reparación, se destine al lugar que el tribunal estime pertinente.

VI.- Así las cosas, con fecha trece de mayo de 2025, la defensa presentó -a través del Sistema de Gestión de Expedientes Lex100- certificado de origen lícito de los fondos ofrecidos en concepto de reparación integral del perjuicio, acompañando los recibos de sueldo de la cónyuge del imputado -Patricia Paglini-, situación que acredita el ahorro legítimo de los mismos.

Por su parte, con fecha catorce de mayo del corriente año, el Dr.

Bustos Marum, en representación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó -vía correo electrónico oficial del tribunal- una planilla con el estado de deuda correspondiente a los conceptos involucrados en la presente causa, calculado al día nueve de mayo del corriente año, a través del cual informó que el monto actualizado de la deuda es de catorce millones setecientos cincuenta y seis mil pesos con sesenta y siete centavos (\$14.756.885,67).

VII.- Corresponde decidir sobre la procedencia del instituto de reparación integral del perjuicio, según planteo introducido por la defensa y en función de la posición favorable asumida por el Ministerio Público Fiscal y de la oposición del fisco nacional como tercero interesado.

Al objeto, se parte de considerar que, de acuerdo al requerimiento de elevación de la causa a juicio, se atribuye a Domingo Horacio Oliva que durante el periodo fiscal 2018 correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, mediante créditos fiscales improcedentes, utilizando facturas apócrifas, con fecha 21 de enero de 2019, como consecuencia de haber reducido fraudulentamente los saldos del impuesto a ingresar, habría evadido de tributar al fisco la suma de dos millones trece mil trescientos nueve pesos con noventa centavos (\$2.013.309,90), calificando dicha conducta como evasión impositiva agravada por el uso de documentación material o ideológicamente falsa, prevista por el art. 2 inc. D del régimen penal tributario instituido por la Ley 27.430, en carácter de autor (art. 45 del C.P.).

Según es sabido, la Ley 27.147, publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio de 2015, modificó el artículo 59 del Código Penal e incorporó nuevas causales de extinción de la acción penal. En lo que aquí interesa, estableció que "La acción penal se extinguirá: . 6o) Por conciliación o reparación integral del perjuicio", señalando que lo será "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes". De esta manera, la reforma del art. 59 del CP receptó las reglas de disponibilidad de la acción que el Código Procesal Penal Federal (Ley 27063) reglamentó en sus artículos 30 y siguientes (normas carentes de implementación a la fecha).

Así, el Código Procesal Federal contempla -de manera expresa- la conciliación como mecanismo de resolución alternativa del conflicto generado por el delito, dentro del elenco de supuestos de disponibilidad de la acción del art. 30, en tanto alude a la reparación solo en forma indirecta, como causal de sobreseimiento (art. 269 inc. g, CPPF).

Ello importa, pues, que la reparación integral del perjuicio opera en el marco de dicha ley procesal como causal extintiva de la acción sin ningún tipo de condicionamiento. En efecto, si bien la norma sustantiva estipula que dicho efecto debe darse "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales", lo cierto es que el Código Federal de procedimientos no fija exigencias determinadas para su acaecimiento. En cambio, la conciliación se halla sujeta a la aplicación de un procedimiento particular, lo cual hace evidente que los institutos mencionados son diversos y no pueden ser considerados de manera indiferenciada.

Al respecto, la doctrina define a la conciliación como "un mutuo acuerdo, obviamente bilateral, entre el imputado y la supuesta víctima que pone fin a su enfrentamiento"; en tanto la reparación del daño supone "el

cumplimiento unilateral de las prestaciones comprendidas en la obligación de resarcir satisfactoriamente todas ("integral") las consecuencias indebidamente producidas con el hecho ilícito. En verdad son instituciones de la realidad y del derecho tan distintas que la reparación puede existir sin conciliación y viceversa" (Pastor, Daniel R.; "La introducción de la reparación del daño como causa de exclusión de la punibilidad en el derecho penal argentino", DPI, columna de opinión, 11.09.2015).

Cabe señalar que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, a través de la Resolución N° 2/2019, puso de vigor -en lo que aquí interesa- los artículos 22, 31, 34, 80 y 81 de dicho digesto legal para "todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federal del territorio nacional." Entre dichas disposiciones, debe citarse el artículo 22, que dispone: "Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".

Ello implica un cambio de paradigma en el derecho penal, al propender a la solución de conflictos por mecanismos alternativos a la tradicional imposición de las sanciones penales (prisión, multa e inhabilitación). Con el foco puesto en la víctima del delito, se abre a la par la posibilidad de una mejor situación procesal del imputado —quien, de otro modo, debería enfrentar un juicio oral con la posibilidad de sufrir una pena— y se favorece la dinámica de la praxis judicial.

Oliva propuso la reparación integral del perjuicio por el hecho que se le atribuye, al abonar la totalidad del monto reclamado por el ARCA que incluye deuda de capital e intereses. El Ministerio Público Fiscal ha prestado conformidad, por estimar viable e integral la proposición, y el representante legal de ARCA se opuso, por entender que el régimen penal tributario impide aplicar el instituto del art. 59, inciso 6, del CP.

Tras un análisis y consideración de los extremos que configuran el caso, a la luz de las constancias del expediente, las audiencias anteriores y lo surgido en la presente, opto por dar prevalencia a la anuencia brindada por la auxiliar fiscal, que ha propiciado la aplicación de la reparación integral en pos de resolver en forma alternativa el conflicto penal, en consonancia con lo establecido por el art. 22 del Código Procesal Penal Federal, que impone tanto a jueces como a representantes del Ministerio Público procurar resolver los conflictos surgidos a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

Para así decidir —más allá de señalar de que no existe un fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la materia—, considero que hay razones valederas para sostener que el instituto de la reparación integral del daño resulta aplicable a causas relativas a delitos tributarios.

En efecto, el artículo 16 del art. 29 del régimen penal tributario establecido por ley 24.769 establece que, en supuestos como los de este caso, la acción penal se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los treinta (30) días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula. Para el caso, la Administración Tributaria estará dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren cancelados en forma incondicional y total con anterioridad a la formulación de la denuncia. Este beneficio de extinción se otorgará por única vez por cada persona humana o jurídica obligada.

Estas particularidades que presenta el procedimiento en materia tributaria, desde mi perspectiva, no suponen que el régimen general establecido por el artículo 59 inciso 6° del Código Penal resulte inaplicable para esos casos.

Es que, en rigor, cuando el art. 4 del C.P. alude a que sus disposiciones se aplicarán a los delitos de las leyes especiales en cuanto éstas no dispongan lo contrario, se está refiriendo expresamente a normas que se opongan a su régimen general, lo que no ocurre en el caso de los delitos tributarios que prevén expresamente la posibilidad de que se extinga la acción en determinados supuestos. Para decirlo en otros términos, no es posible considerar que el régimen de extinción de la acción establecido por el art. 59 inciso 6° del Código Penal resulte contrario a lo establecido en la ley penal tributaria, sino que en todo caso la complementa.

Desde mi perspectiva, respecto a los delitos tributarios existirían dos causales de extinción de la acción penal por pago, una prevista en el art 16 de la ley no 24.769 (o la del art 16 del nuevo Régimen Penal Tributario) y otra la reparación integral del art. 59 inc. 6o del CP. Mientras la primera establece estadios concretos para su deducción (iniciado ya el proceso o con anterioridad a la presentación de denuncia), la segunda no posee un límite preciso (lo único exigible es la vigencia de la respectiva acción).

Ambas figuras responden a finalidades distintas y coexisten dentro del ordenamiento jurídico como herramientas válidas para resolver el conflicto penal, especialmente cuando se encuentra satisfecho el interés fiscal y el Ministerio Público Fiscal ha prestado conformidad.

Esta interpretación, por cierto, respeta el principio pro homine que impone al intérprete seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera sea la fuente que la suministre, ya sea interna o internacional. En efecto, se trata de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual, se debe acudir a la norma más amplia, o interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, eso es, estar siempre a favor del hombre.

Dicho esto, no puedo dejar de mencionar que el pedido de reparación integral del daño cuenta con la conformidad del Ministerio Público y con la aseveración del propio representante del ARCA de que el monto ofrecido satisface la totalidad de la deuda exigida por el ente recaudador para con el imputado, incluido los intereses.

Esto es importante de destacar porque la representación del ARCA no actúa en este caso como parte querellante —cuando podría serlo—, sino que fue convocado al solo efecto de opinar si el monto ofrecido como reparación integral del daño satisfacía las exigencias monetarias del ente recaudador, sobre todo porque en la anterior audiencia que se celebró el representante del órgano recaudador había manifestado su oposición precisamente por su insatisfacción con el monto ofrecido como reparación.

Cabe señalar que la finalidad principal del ARCA es de carácter recaudatorio, mientras que la persecución penal es una atribución exclusiva del Ministerio Público Fiscal, quien en este caso ha manifestado su conformidad con el pedido de reparación integral formulado por la defensa, en los términos del artículo 59, inciso 6, del Código Penal, como causal de extinción de la acción penal.

En este contexto, resulta jurídicamente contradictorio que, habiéndose acreditado que el imputado posee la capacidad económica necesaria para satisfacer el interés fiscal comprometido, el organismo recaudador se oponga a una solución que no sólo atiende su finalidad económica, sino que además ha sido expresamente aceptada por el titular de la acción penal pública. En consecuencia, su opinión debe valorarse en función de la satisfacción de sus intereses económicos, los cuales se encuentran debidamente cubiertos mediante la oferta de pago efectuada por el imputado, conforme al monto actualizado informado por el propio fisco para el mes de mayo del corriente año.

Dicho esto, dada la conformidad de la titular de la acción penal -quien ha propiciado la aplicación de la reparación integral y conciliación en pos de resolver el conflicto a fin de buscar el restablecimiento de la armonía y la paz social- y en función de lo establecido por los arts. 59 inc. 6o del CP y 22 del CPPF, según ley 27063, resulta procedente la reparación integral del perjuicio por parte del acusado.

En consecuencia, Domingo Horacio Oliva deberán abonar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el término de diez (10) días hábiles desde que la presente resolución adquiera firmeza, la suma de catorce millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos con sesenta y siete centavos (\$14.757.885,67), mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta que en el término de cinco (5) días hábiles el ente recaudador indique, en tres cuotas iguales y consecutivas.

Por último, y para el hipotético supuesto de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se oponga a aportar una cuenta bancaria y/o a recibir el monto pecuniario que el imputado deberá abonar de conformidad a lo prescripto en el presente decisorio, se dispone que tales fondos tengan por destino el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a modo de colaboración con la situación de emergencia penitenciaria a la que la provincia adhirió, en consideración del alojamiento de personas detenidas a disposición de la justicia federal en los Establecimientos del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Por lo expuesto, en concordancia con el dictamen fiscal y oídas todas las partes; SE RESUELVE:

I. Hacer lugar a la reparación integral del perjuicio solicitada en favor de Domingo Horacio Oliva, D.N.I. 8.538.594 (arts. 59 inc. 6o y 22 CPPF).

II. Disponer que Domingo Horacio Oliva abone a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en el término de diez (10) días hábiles desde que la presente resolución adquiera firmeza, la suma de catorce millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos con sesenta y siete centavos (\$14.757.885,67) mediante transferencia o depósito bancario a la cuenta que en el término de cinco (5) días hábiles el ente recaudador indique, en tres cuotas iguales y consecutivas, cuyo cumplimiento deberán acreditar ante este Tribunal, a los efectos de ley; III. Disponer, para el hipotético supuesto de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se oponga a aportar una cuenta bancaria y/o a recibir el monto pecuniario que los procesados deben abonar de conformidad a lo prescripto en el presente decisorio, que tales fondos sean destinados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a modo de colaboración con la situación de emergencia penitenciaria a la que la provincia adhirió, en consideración del alojamiento de personas detenidas a disposición de la justicia federal en los Establecimientos del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Protocolícese y hágase saber.-

JULIAN FALCUCCI

JUEZ DE CAMARA

HERNAN MOYANO CENTENO

SECRETARIO DE CAMARA

Seguidamente se libraron cédulas electrónicas a la Fiscalía ante el Tribunal Oral N°1 de Córdoba, y a los Dres. Bustos Marum, Lunad Rocha y Ferrero.

Conste.-

HERNAN MOYANO CENTENO

SECRETARIO DE CAMARA